

## EL TRABAJO DE LA DEMOCRACIA Tolerancia y discriminación en la cultura política argentina

*José Eduardo Jorge  
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)*

### **Democracia y diversidad**

Una de las tareas de la democracia consiste en garantizar la libertad de los diversos grupos e individuos para tener su propio proyecto de vida, logrando al mismo tiempo que éstos tomen y se sientan parte del desenvolvimiento de la vida en común. La democracia puede concebirse así como una forma particular de convivencia, que valora y busca simultáneamente la *diversidad* y la *unidad*. Si la sociedad trata de superar sus diferencias a partir de una concepción única de la “vida buena”, la diversidad sufre en nombre de la unidad. Si, por el contrario, los grupos distintos se limitan a reconocer y aceptar sus diferencias, pero no se comprometen en la construcción común de la vida colectiva, la sociedad tiende a disgregarse en un conjunto de comunidades cerradas: es la unidad la que sufre aquí en nombre de la diversidad. Las minorías, en particular, se verán toleradas, pero no plenamente integradas. La democracia supone, pues, *convivir* –y no meramente *coexistir*– en la diferencia.

Se desprende de esto que la democracia es una forma de convivencia difícil de alcanzar. No sorprende que sólo haya logrado plasmarse –y de manera muy imperfecta– en breves y contados momentos en la historia de la humanidad. En la gran mayoría de las sociedades que han existido, las minorías poderosas han impuesto a los demás sus propias concepciones e intereses. A la inversa, en la historia de las mismas democracias, el pluralismo social y cultural –más allá del puramente político– se ha abierto camino no sin dificultad, cuando la visión de los grupos mayoritarios ha intentado obstruir o suprimir la de las minorías que la contradecían. Y, en algunos casos, las mismas minorías han planteado sus reivindicaciones en términos que implicaban una ruptura definitiva con el resto de la sociedad, bloqueando así el camino a su propia integración.

La diversidad se está convirtiendo en un valor normativo central de la democracia del siglo XXI, luego de que muchos países comenzaran a experimentarla con creciente intensidad en la segunda mitad del siglo anterior. A raíz de los flujos migratorios y de la propia diversificación interna de los Estados-nación, éstos tienden a reconocerse cada vez más como *sociedades multiculturales*. El nuevo ideal democrático no pide al Estado que trabaje para crear una sociedad homogénea, borrando las diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas o de estilo de vida, sino que las reconozca, valore y proteja. La equidad social y económica sigue siendo una aspiración general, pero comparte ahora su lugar con la democracia cultural (Touraine, 1998).

La tarea que las democracias tienen por delante no es sencilla, como lo demuestra, en primer lugar, el hecho de que este ideal normativo –como ocurre con toda visión emergente– avanza no sin intensa oposición o controversia.

En democracias como Francia, Alemania, Gran Bretaña y España, entre un 60% y un 80% de los ciudadanos están de acuerdo en que se prohíba a las mujeres musulmanas usar el velo en lugares públicos, incluyendo escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales (Pew Research Center, 2010). En abril de 2011, Francia puso legalmente en vigencia esta prohibición. El gobierno la fundamentó en el “daño” que la práctica produce “en las reglas que hacen posible la vida en comunidad, aseguran la dignidad de la persona y la igualdad entre los sexos”. La organización Amnistía Internacional la consideró, por el contrario, una violación a las libertades de expresión y de culto, pero varios países europeos estudian medidas similares (1).

La institución del matrimonio igualitario, que rige hoy en una decena de naciones –entre ellas la Argentina–, sigue encontrando oposición en muchas democracias industrializadas y en la mayoría de las latinoamericanas, aunque las uniones civiles y otras formas de reconocimiento de las parejas del mismo sexo se hallan más extendidas.

### **Formación y cambio de la cultura política**

En estos, como en otros posibles ejemplos, el trabajo de la democracia se desarrolla en dos planos: el sociocultural y el institucional. Las dos dimensiones, aunque interdependientes, tienen su propia dinámica. La cultura política pertenece a la primera dimensión y ejerce una influencia profunda sobre el funcionamiento de las instituciones. El enfoque de la cultura política supone que las creencias, valores y pautas de conducta de los ciudadanos comunes tienen un peso decisivo en el rumbo de las democracias. De la gente común –y no sólo, ni principalmente, de la acción de las elites– depende en gran medida la estabilidad, profundidad y efectividad del sistema (Inglehart, 1997; Putnam, 1993; Inglehart and Welzel, 2005; Jorge, 2010).

Es improbable, por caso, que las instituciones políticas traten y aprueben una ley de matrimonio igualitario, si una porción considerable del electorado rechaza las uniones entre personas del mismo sexo. Del mismo modo, las medidas restrictivas de la libertad de expresión de las minorías musulmanas en Europa se apoyan en el peso de las actitudes de intolerancia hacia estos grupos en el resto de la sociedad. Las actitudes xenofóbicas más virulentas suelen encontrar expresión política concreta en partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional en Francia.

Ahora bien, que la cultura tenga un fuerte impacto sobre las instituciones, no implica que no exista influencia alguna en la otra dirección. La mayoría de los estudiosos asume que entre las esferas cultural y político-institucional hay interacción causal. Pero dado que la cultura cambia lentamente, el interrogante clave es en qué medida las instituciones –en particular, las democráticas– contribuyen o pueden contribuir a ese cambio. En este sentido, la experiencia de la tercera ola de democratización –el proceso de difusión global de la democracia iniciado a mediados de los años setenta– ha dado lugar a interpretaciones mixtas.

Para unos, el principal motor del cambio de la cultura política es el desarrollo económico (Inglehart and Welzel, 2009). Los defectos de muchas de las nuevas democracias, la caída de algunas, así como la persistencia de regímenes autoritarios, obedecen, desde esta

perspectiva, a un desarrollo económico todavía insuficiente. Los ciudadanos de estas sociedades, dice el argumento, dan lógicamente prioridad a la cobertura de sus necesidades materiales, más que a la satisfacción de necesidades de orden superior, como una mayor libertad y participación política. Sólo cuando la modernización económica –hoy en marcha en casi todas partes– extienda en grado suficiente el bienestar material, el ascenso de esas prioridades más elevadas –o *posmaterialistas*, en términos de esta teoría– se traducirá en cambios de la cultura política y, como consecuencia de ello, en cambios institucionales que mejoren o profundicen la democracia existente, o la instauren donde aún no existe. (También las reacciones xenofóbicas en países europeos se deberían a un retroceso –posiblemente temporario– de las prioridades posmaterialistas, originado en una crisis económica ya prolongada, en la percepción de la inmigración como una amenaza al bienestar material de esas sociedades, y en el sentimiento de inseguridad causado por atentados terroristas.)

Por lo tanto, según estos autores, la dinámica política de las democracias de la tercera ola, si bien tiene algunos efectos sobre la cultura política, no alcanza para modificarla de un modo significativo, frente a las grandes fuerzas del desarrollo económico y el cambio tecnológico.

Putnam (1993), al concluir su estudio de dos décadas sobre las diferencias de desempeño entre los gobiernos regionales de Italia creados a comienzos de los 70, observó asimismo que la influencia de la estructura institucional sobre la cultura era apenas visible al cabo de veinte años. Por el contrario, era la cultura cívica peculiar de cada región la que parecía dar su impronta al funcionamiento de su gobierno. Sin embargo, en la interpretación de Putnam, lo que conformaba las culturas regionales no era el desarrollo económico. La diferente tradición asociativa de cada región –en especial la del Norte frente a la del Sur– había derivado, al cabo de varios siglos, en muy distintas “comunidades cívicas” o “stocks de capital social”, que producían a su vez marcados contrastes de desempeño institucional. El impacto del cambio institucional sobre la cultura sólo podría apreciarse en el largo plazo.

El paradigma de la transitología, que surgió de la miríada de estudios sobre las transiciones democráticas de la tercera ola, puso un énfasis casi exclusivo en los cálculos y acciones desplegados por las elites (O’Donnell y Schmitter, 1991). La cultura no era postulada como un factor gravitante. Más explícitamente, Schmitter y Karl (1991) consideraron “erróneo” el tema de la “cultura cívica”. El funcionamiento de las nuevas democracias se basaría en “normas de prudencia” aplicadas por actores racionales, antagónicos y desconfiados, no en hábitos “profundamente arraigados” de tolerancia, confianza y demás. Esto último sería un producto, más que un productor, de la democracia. Según este enfoque, serán las instituciones democráticas las que conformen, a la postre, una cultura política democrática –aunque, según parecen sugerir Schmitter y Karl, bien podrían funcionar sin ella–.

Otros autores ven la cuestión de un modo distinto. Diamond (2009) subraya que todas las democracias –y especialmente las nuevas– necesitan un equilibrio entre conflicto y consenso. La democracia es un sistema basado en la competencia institucionalizada por el poder, pero una competencia demasiado intensa puede desestabilizarlo. El sistema requiere,

pues, mecanismos que mitiguen el conflicto por medio del consenso. Este es el papel que puede cumplir en el largo plazo la “cultura cívica” –como lo sugirieron hace ya medio siglo Almond y Verba– (1963).

Trazando un balance de la tercera ola a fines del siglo xx, Diamond (1998) destacaba que en muchos de esos países el apoyo popular a la democracia se sustentaba, más allá de los problemas económicos, en una evaluación positiva de los bienes políticos provistos por el sistema. Los ciudadanos valoraban, en especial, las nuevas libertades de las que gozaban. Había, pues, indicios de un “aprendizaje político”, basado en la experiencia de vivir bajo el nuevo sistema. Las esferas cultural y política parecían tener una dinámica propia, con algún grado de autonomía respecto de la dimensión económica.

En forma similar, Torcal (2008) concluye que el apoyo “incondicional” a la democracia en España se logró en pocos años, luego de concretada la transición, mediante un proceso de “resocialización adulta” que produjo un cambio global y permanente en las actitudes de los españoles. Según Torcal, este giro actitudinal fue resultado de la política de consenso adoptada por los principales actores políticos durante el periodo de transición y consolidación democráticas, que tuvo, en particular, la característica de dejar la “cuestión del régimen” de gobierno fuera de la contienda electoral. La hipótesis supone que las estrategias de las elites políticas pueden tener un impacto rápido y profundo sobre, al menos, algunas actitudes de los ciudadanos –en este caso, el apoyo a la democracia–.

En términos más generales, los conceptos de “aprendizaje político” o “resocialización adulta” sugieren que la cultura política puede cambiar como producto de la experiencia propiamente política y no sólo del desarrollo económico.

Sin embargo, como no todos los componentes de la cultura política tienen la misma importancia, surge la cuestión de si la experiencia política de los ciudadanos es capaz de cambiar o conformar sus actitudes políticas centrales y no sólo las periféricas. Inglehart (2003) sostiene que en nuestra época de difusión global del ideal democrático, los ciudadanos de casi todos los países –aún de aquellos con regímenes autoritarios– expresan, al ser encuestados, un apoyo mayoritario a la democracia. Según Inglehart, este tipo de apoyo es una condición necesaria pero no suficiente para que la democracia pueda emerger, estabilizarse, profundizarse o ser efectiva. Para esto, serían indispensables otras actitudes centrales, como la tolerancia, la confianza y, especialmente, las aspiraciones de libertad (ver también Inglehart and Welzel, 2005 y 2009). A partir de fines del siglo xx, el estancamiento –y, en ciertos casos, el retroceso– de los procesos iniciados en la tercera ola –que han llevado a algunos politólogos a hablar de una “recesión” democrática–, igual que la pervivencia de regímenes autoritarios, parecen darle la razón.

¿No es posible que, en virtud del mismo ejercicio democrático, los ciudadanos aprendan a ser más tolerantes, a confiar más entre sí y a querer más libertad? La respuesta a esta pregunta depende de la que demos a la siguiente: ¿la socialización política del individuo termina esencialmente en las etapas tempranas de la vida, o es factible que algunas actitudes centrales cambien durante la adultez por efecto del aprendizaje? Los estudios de panel,

basados en entrevistas repetidas a las mismas personas en distintos momentos del tiempo, sugieren que lo que predomina es la estabilidad actitudinal. Pero los resultados no son del todo concluyentes, ni hay muchas investigaciones de este tipo, que necesitan prolongarse por décadas (Krosnick and Alwin, 1989).

No es infrecuente, por ejemplo, que el Estado y el sistema político intenten promover en la sociedad mayores niveles de tolerancia hacia minorías o grupos que sufren discriminación. En muchos casos, los mismos grupos afectados y quienes los apoyan, desarrollan, normalmente por medio de organizaciones de la sociedad civil, acciones que buscan modificar las actitudes de segmentos definidos de la población o del grueso de los ciudadanos. De modo más general, una multiplicidad de organizaciones gubernamentales y civiles promueve diversos tipos de causas con objetivos que suponen un cambio de las actitudes, a veces muy arraigadas, de los sectores destinatarios de sus campañas. Es el caso de las asociaciones ecológicas, pacifistas, de derechos humanos y demás. ¿Están condenados estos esfuerzos a lograr cambios superficiales o, en todo caso, a concretar, reforzar o movilizar el apoyo de quienes ya poseen una predisposición favorable?

Este tipo de acciones dirigidas a fines específicos están integradas al proceso más general de formación de la opinión pública, en el que participa un conjunto muy amplio de actores sociales y políticos con puntos de vista divergentes, y en el que intervienen decisivamente los medios de comunicación. Concebido como un mecanismo de “deliberación colectiva”, este proceso –si funciona razonablemente bien– está en condiciones de promover, según Page y Shapiro (1992), la “educación política” de la gente. Desde esta perspectiva, los dirigentes políticos, los expertos, los funcionarios, los movimientos sociales, los periodistas pueden contribuir a la educación de los ciudadanos proporcionando información e interpretaciones sobre los temas de interés público.

Las preferencias formadas de este modo tienden, en general, a ser congruentes con los valores y creencias previos de los individuos, pues las personas se ven inclinadas a exponerse a los mensajes que concuerdan con sus puntos de vista, a percibir y retener de ellos los elementos también concordantes, y a interpretar la información en su grupo de conocidos, con quienes tienen afinidades. Sin embargo, la investigación de las actitudes ha planteado varios mecanismos por los cuales éstas pueden cambiar como resultado de nueva información y de procesos de influencia social (De Montmollin, 1985; Perloff, 1991).

Heifetz (1997) observa acertadamente que, en una época de cambios acelerados, grupos o sociedades enteras se ven en la necesidad de aprender nuevos métodos para resolver problemas o crisis que se hallan entramados en sistemas complicados e interactivos. Propone un conjunto de estrategias que los dirigentes políticos y sociales pueden aplicar para promover o facilitar ese aprendizaje. Las estrategias se basan en devolver a la gente lo que Heifetz llama el “trabajo adaptativo”. Como muchas crisis o problemas sociales entrañan una incongruencia entre la realidad y los valores de las personas, o incluso una contradicción de valores, el trabajo suele requerir que los mismos valores cambien.

En síntesis, es posible postular al menos tres grandes procesos de formación y cambio de la cultura política: 1) la tradición cultural y la trayectoria histórica específica de cada sociedad; 2) el desarrollo económico y el cambio tecnológico; 3) la experiencia y el aprendizaje políticos. Dilucidar el peso real de cada uno es tarea de la investigación empírica.

### **La tolerancia entre los argentinos**

Analizar la evolución de algunos indicadores de tolerancia entre los argentinos desde la recuperación de la democracia nos permitirá arrojar algo de luz sobre la discusión precedente. Tanto la *teoría de la posmodernización* –desarrollada especialmente por Inglehart y, más recientemente, también por Welzel–, como la *teoría del capital social*, cuyo principal autor es Putnam, consideran la tolerancia como uno de los componentes centrales de la cultura política democrática (2).

Queda claro, como surgió al abordar la cuestión de la diversidad, que la tolerancia no basta por sí sola para hacer funcionar la democracia. La *confianza entre las personas* –otro elemento central destacado por ambas teorías– contribuye a la unidad. En sus trabajos más recientes, Inglehart y Welzel (ver, especialmente, 2005) tratan a las *aspiraciones de libertad* como el componente más importante de la cultura democrática. Agregan, a los tres aspectos ya señalados, las *formas de participación política autodirigidas* que plantean desafíos a las elites, como los petitorios y las manifestaciones. Los cuatro integran un sistema interrelacionado que denominan *valores de autoexpresión* (3).

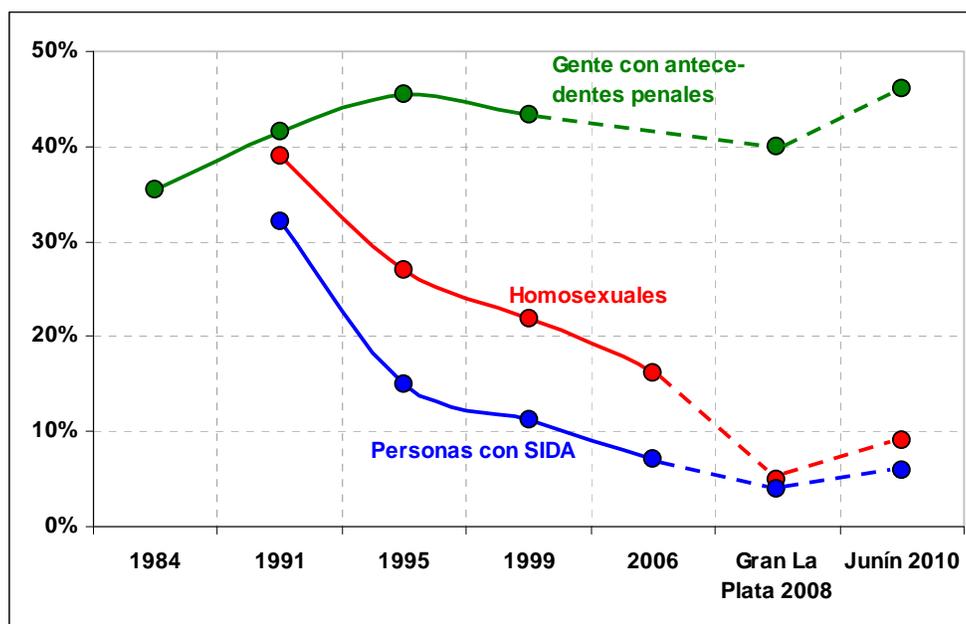
La tolerancia es, para nosotros, de particular interés, pues no ha formado parte de la tradición política de los argentinos. A poco de recuperada la democracia, Portantiero (1984) reflexionaba que, aunque la inmigración terminó por hacer de la Argentina una sociedad igualitaria, ello no alcanzó para “conformar una cultura política democrática, autosostenida en la tolerancia” (p. 142). Cavarozzi (1983) no consideraba “demasiado halagüeño” el panorama que se abría a la naciente democracia, pues ya al producirse el golpe de 1976 “la sociedad argentina estaba profundamente penetrada por valores y costumbres antidemocráticos: el culto a la violencia, (...) la falta de tolerancia por las conductas e ideas disidentes y el pensamiento crítico, y el desprecio por el consenso” (pp. 69-70).

Nuestro análisis se enfocará en la trayectoria seguida por tres indicadores específicos, referidos a la tolerancia hacia los grupos de las *personas con SIDA*, los *homosexuales* y los *individuos con antecedentes penales*. La elección no proviene sólo de la disponibilidad de datos sobre estos indicadores para las últimas décadas, sino además de las interpretaciones que surgen de sus recorridos. Además, por tratarse de uno de los grupos más discriminados en la mayoría de los países, las actitudes hacia los homosexuales están consideradas una de las mejores “pruebas ácidas” de tolerancia en una sociedad (Inglehart, 2003). En los estudios comparativos internacionales, la tolerancia hacia los homosexuales exhibe una fuerte correlación con la estabilidad y efectividad de la democracia.

Para medir la tolerancia, se suele presentar al encuestado una lista de grupos sociales, preguntándole si hay uno o más a los que “no le gustaría tener como vecinos”. La Figura 1

muestra cómo fue evolucionando el porcentaje de la población que mencionó a estos tres grupos. Los datos del período 1984-2006 son representativos de todo el país y surgen de nuestros cálculos a partir de las bases de datos de la Encuesta Mundial de Valores coordinada por Inglehart. Los porcentajes de los años 2008 y 2010 pertenecen, respectivamente, a la región del Gran La Plata y a la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Éstos corresponden a dos proyectos de investigación sobre cultura política dirigidos por el autor de este artículo (4).

**Figura 1 – Evolución de Indicadores de Tolerancia en Argentina**  
**Grupos que no querría “como vecinos” – En % de la población**



Fuente: Años 1984-2006: cálculos propios para el total país a partir de la base de datos de la Encuesta Mundial de Valores. Años 2008 y 2010: Proyectos de Investigación PID-P001 (UNLP) y P-0415 (UNNOBA).

Salta a la vista la caída profunda y sostenida de la proporción de argentinos que nombran a los homosexuales y a las personas con SIDA, tendencia que refleja un aumento notable de la tolerancia en un lapso de dos décadas. En 1991, primer punto de la serie temporal para los dos grupos, el 39% de los argentinos no quería tener homosexuales como vecinos. La cifra había descendido al 16% en 2006 y en nuestros estudios por encuesta se redujo al 5% en el Gran La Plata (2008) y al 9% en Junín (2010). Este cambio significativo en las actitudes de los argentinos constituye el telón de fondo del tratamiento y aprobación de la ley de matrimonio igualitario a mediados de 2010.

La actitud hacia las personas con SIDA exhibe una trayectoria similar. El porcentaje de quienes no las querían como vecinos baja del 32% en 1991 al 7% en 2006. En 2008 y 2010, fue del 4% en el Gran La Plata y del 6% en Junín.

Muy distinto es el fenómeno que se observa en relación con la gente con antecedentes penales. En su caso, la tolerancia tiende a disminuir. Mientras en 1984 señalaba a este grupo el 36% de los argentinos, en 1999 –último punto de la serie nacional– lo hacía el 43%. En 2008 lo nombró el 40% de los platenses y en 2010 el 46% de los juninenses. No hay duda de que el trasfondo aquí es el ascenso en la agenda pública del tema de la inseguridad y el delito.

El hecho es significativo, pues son contados los grupos o categorías sociales con niveles tan altos de discriminación. Por ejemplo, el 36% de los argentinos señaló a los alcohólicos en 2006, y el 31% de los platenses, a los drogadictos en 2008. Con porcentajes no desdeñables, pero mucho más bajos, aparecen los coreanos y chinos –que registran un 12% en Junín 2010 y un 9% en el Gran La Plata 2008– y los musulmanes, con un 6% en 1999 en todo el país.

En el orden internacional, la tolerancia hacia determinados grupos sociales está ligada a la historia y la cultura particulares de cada sociedad, pero también a sus niveles de desarrollo económico. La teoría de la posmodernización subraya especialmente este punto. Para esta corriente de investigación, la modernización económica está estrechamente asociada con la democracia estable y efectiva, a través de los cambios que produce en la cultura y en la estructura social.

Es necesario volver sobre esta teoría –que enfoca la democracia desde la perspectiva del cambio social a largo plazo–, tanto por su alto grado de formalización y capacidad predictiva, como por la formidable base de datos –la Encuesta Mundial de Valores– sobre la que se apoya: 350 mil entrevistados con cuestionarios estandarizados en el periodo 1981-2008, pertenecientes a más de 90 países de todos los continentes.

Como han destacado desde los años cincuenta diversos autores, la modernización económica genera un conjunto de transformaciones favorables a la emergencia de la democracia. La extensión de la riqueza reduce las distancias sociales; la educación se generaliza; el desarrollo de los medios de comunicación pone la información política, antes reservada a las élites, al alcance de la gran mayoría; los ciudadanos, que disponen de más educación, información y habilidades de organización adquiridas en lugares de trabajo cada vez más sofisticados, ven acrecentada su capacidad de acción política y cívica.

La teoría que nos ocupa estudia, en particular, los cambios culturales prodemocráticos que produce el desarrollo económico al ingresar en su fase más avanzada, es decir, en la sociedad posindustrial (Inglehart, 1997 y 1990; Inglehart and Welzel, 2005). El principal mecanismo que liga la transformación económica con el cambio de valores se basa en la hipótesis, debida a Maslow, de que las necesidades de los individuos están organizadas en una jerarquía. Las necesidades de supervivencia –fisiológicas y de seguridad física– deben estar razonablemente satisfechas antes de que las personas den prioridad a necesidades de orden superior, como las de estima, pertenencia y autoexpresión. Cuando el desarrollo ha extendido lo suficiente el bienestar material, de modo que segmentos importantes de la sociedad perciben su existencia como segura, las prioridades *materialistas* empezarán a ceder terreno frente a las *posmaterialistas*. Ahora bien, como el núcleo de la personalidad de los

individuos –incluyendo sus valores centrales– se forma en su vida preadulta y permanece estable de allí en más, que las prioridades de un individuo sean materialistas o posmaterialistas dependerá del grado de seguridad o inseguridad subjetiva con el que creció. La noción de jerarquía de necesidades, combinada con esta *hipótesis de la socialización*, arroja que, si una sociedad avanza en un desarrollo económico sostenido, las sucesivas generaciones tendrán prioridades valorativas diferentes. El cambio de valores de la sociedad –desde las prioridades materialistas hacia las posmaterialistas– se irá produciendo a medida que las generaciones más jóvenes reemplazan a las anteriores. Habrá fluctuaciones de corto plazo: una crisis económica provocará un descenso general y temporario de las prioridades posmaterialistas, pero la tendencia de largo plazo no se verá alterada, a menos que la sociedad revierta de un modo permanente su rumbo material.

Percibir la propia existencia como segura o insegura tiene un impacto más amplio sobre el conjunto de normas culturales: la política, la religión, la familia, el trabajo, los estilos de vida, se ven profundamente afectados. Este cambio hacia los *valores posmodernos* –del que los valores posmaterialistas son una parte– se hizo visible en muchos países desde los años sesenta. Los jóvenes de esa época transformaban las costumbres, desafiaban la autoridad y pedían una democracia más participativa. Las prioridades materialistas y posmaterialistas se han medido en las encuestas desde los años setenta y constituyen un proceso bien documentado.

Según Inglehart, los valores posmodernos son esencialmente prodemocráticos. La industrialización puede o no conducir a la democracia, pero el desarrollo económico avanzado, que hace emerger ese sistema de valores, vuelve altamente probable su instauración o profundización. Las aspiraciones de libertad, autonomía individual o autoexpresión, que nacen del sentimiento de seguridad experimentado a edad temprana, constituyen el núcleo de ese sistema. La inseguridad existencial lleva a los individuos a refugiarse en grupos relativamente cerrados compuestos por personas similares, que tienden a desconfiar de los extraños y a discriminarlos. Por el contrario, la certidumbre conduce a ver el mundo como un lugar seguro, a confiar en los demás y a verlos como individuos intrínsecamente valiosos. Surgen así la confianza generalizada y la tolerancia. Las personas establecen vínculos sociales motivados no en la conformidad de grupo, sino en la libre elección. Emergen formas de organización civil y política peculiares, como el activismo autodirigido que plantea desafíos a las elites.

Aquí no exploraremos todas estas relaciones, pero debemos indagar si la tolerancia entre los argentinos guarda o no relación con las prioridades posmaterialistas.

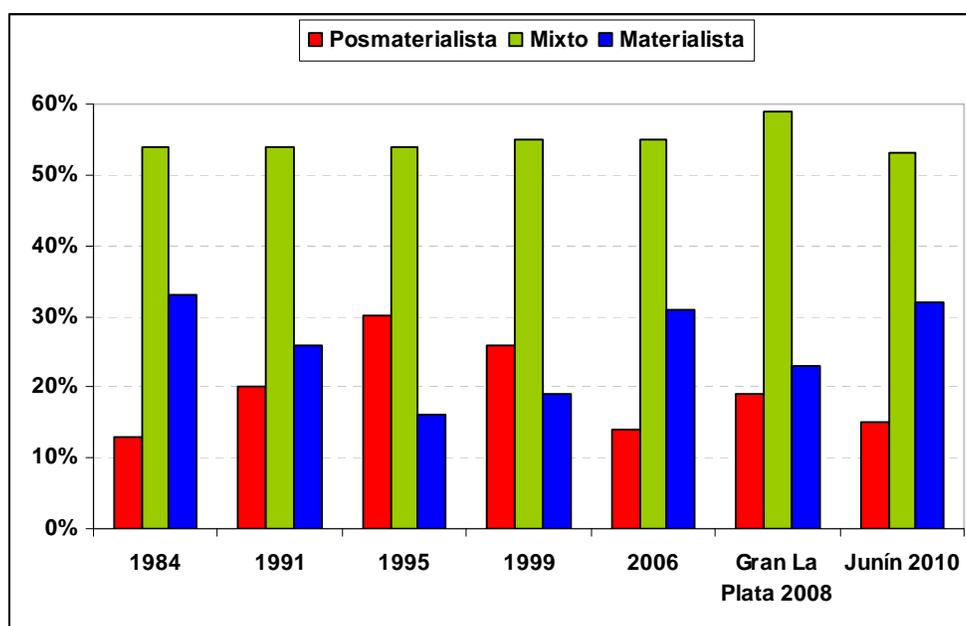
El indicador más utilizado para medir la dimensión posmaterialista/materialista es un índice que surge de presentar al encuestado una lista de cuatro objetivos que el país debería plantearse para los próximos diez años, y preguntarle cuál cree que es el más importante y cuál le sigue en importancia. Los objetivos son mantener el orden de la nación, aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones importantes de gobierno, combatir el alza de los precios y proteger la libertad de expresión. Los entrevistados que eligen la participación y la libertad de expresión –ambos relacionados con las aspiraciones de libertad– son clasificados

como posmaterialistas; los que señalan el orden y los precios, como materialistas; los restantes, como mixtos.

La evolución de este índice en nuestro país, a partir de 1984, se observa en la Figura 2. El porcentaje de posmaterialistas traza una parábola. Es del 13% en 1984, asciende hasta un máximo del 30% en 1995 y desciende hasta el 14% en 2006.

La proporción de materialistas sigue una trayectoria inversa de forma cóncava. De un 33% en 1984, desciende hasta un mínimo del 16% en 1995 y vuelve a aumentar hasta un 31% en 2006. El porcentaje de mixtos –que combinan una meta posmaterialista con otra materialista– se mantiene constante en torno del 55%–.

**Figura 2 – Posmaterialistas y Materialistas en Argentina**  
En % de la población



Fuente: Años 1984-2006: cálculos propios para el total país a partir de la base de datos de la Encuesta Mundial de Valores. Años 2008 y 2010: Proyectos de Investigación PID-P001 (UNLP) y P-0415 (UNNOBA).

En nuestras encuestas, la sociedad del Gran La Plata aparece en 2008 como algo más posmaterialista que el último promedio nacional, con el que coincide, en cambio, la ciudad de Junín, en el año 2010.

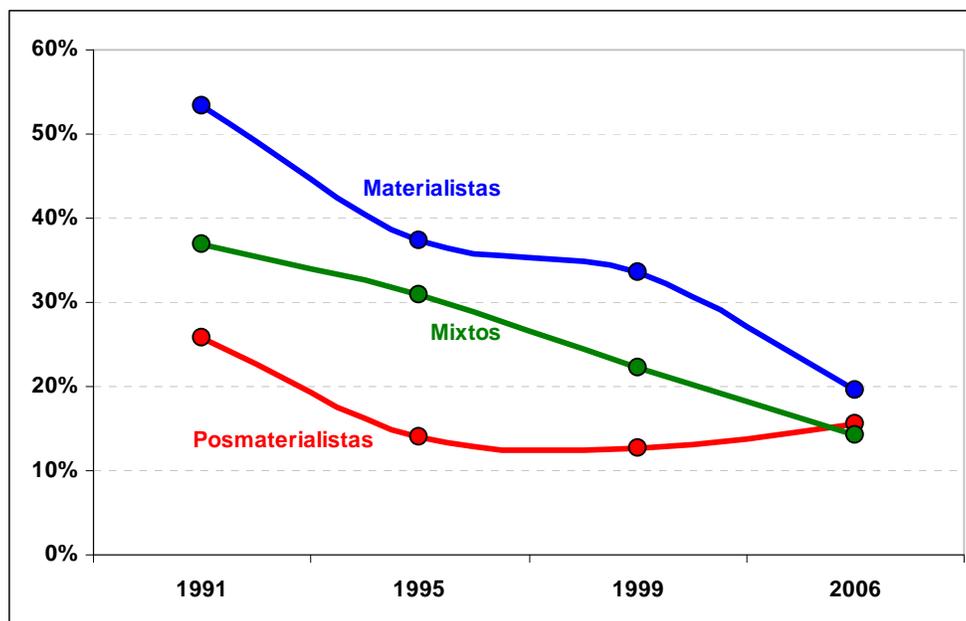
De acuerdo con las predicciones de la teoría, deberíamos esperar que los posmaterialistas sean más tolerantes –y los materialistas menos tolerantes– hacia los diferentes grupos sociales, con los mixtos ocupando un lugar intermedio. De las encuestas transnacionales surge, por ejemplo, que los posmaterialistas son más abiertos hacia los homosexuales en casi todas las sociedades. Comprobaremos de inmediato que, efectivamente, esto es así. Sin embargo, podemos advertir desde ahora que las trayectorias

seguidas por nuestros tres indicadores de tolerancia no coinciden con la del índice de posmaterialismo.

En la Figura 3 vemos la evolución del porcentaje de argentinos –clasificados según el índice de posmaterialismo– que no querrían homosexuales “como vecinos”.

Tres aspectos que surgen del gráfico son especialmente notables: a) las diferencias sistemáticas de tolerancia entre posmaterialistas, materialistas y mixtos en el periodo 1984-1999, coincidentes con las predicciones de la teoría; b) la continua disminución del porcentaje que discrimina a los homosexuales en las tres categorías; c) la virtual desaparición de las diferencias de tolerancia entre posmaterialistas y mixtos en el año 2006, con los materialistas sólo ligeramente menos tolerantes. En 1984, el 53% de los materialistas no quería homosexuales como vecinos, frente a un 26% de los posmaterialistas. En 2006, las cifras se habían reducido a un 20% de los materialistas y a un 16% de los posmaterialistas. Entre puntas, los posmaterialistas que discriminan a los homosexuales se redujeron un 40%; los materialistas, un 63%.

**Figura 3 – Argentina: no querría Homosexuales “como vecinos”**  
En % de la población



Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de la Encuesta Mundial de Valores.

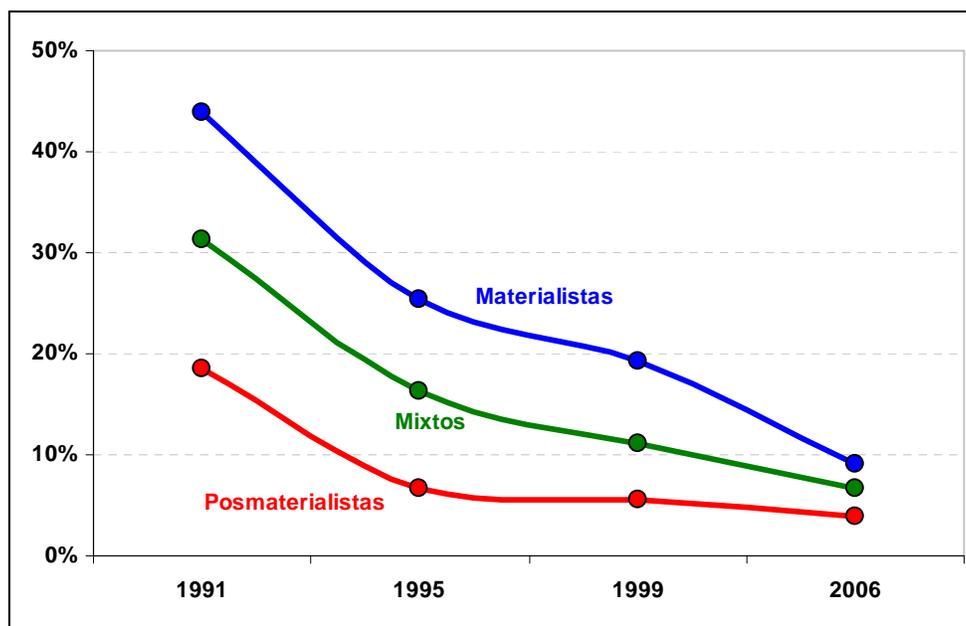
Resulta muy claro, pues, que la disminución sustancial del porcentaje de argentinos que discrimina a los homosexuales no se explica por un aumento del posmaterialismo y una reducción del materialismo a lo largo del período. La dimensión posmaterialista/materialista sigue, como hemos visto, una trayectoria curvilínea, que en 2006 acaba por retrotraer las proporciones de posmaterialistas y materialistas a los niveles de 1984. Por el contrario, el

porcentaje de la población que discrimina a los homosexuales declina constantemente y lo hace, además, en las tres categorías de la dimensión posmaterialista/materialista.

Exactamente el mismo fenómeno ha tenido lugar en el caso de las actitudes hacia las personas con SIDA, como se observa en la Figura 4. En 1984, discriminaba a este grupo social el 44% de los materialistas y el 19% de los posmaterialistas; en 2006, lo hacía sólo el 9% de los materialistas y el 4% de los posmaterialistas. Es remarcable que, entre puntas, los que discriminan en las tres categorías caen la misma proporción: 79%.

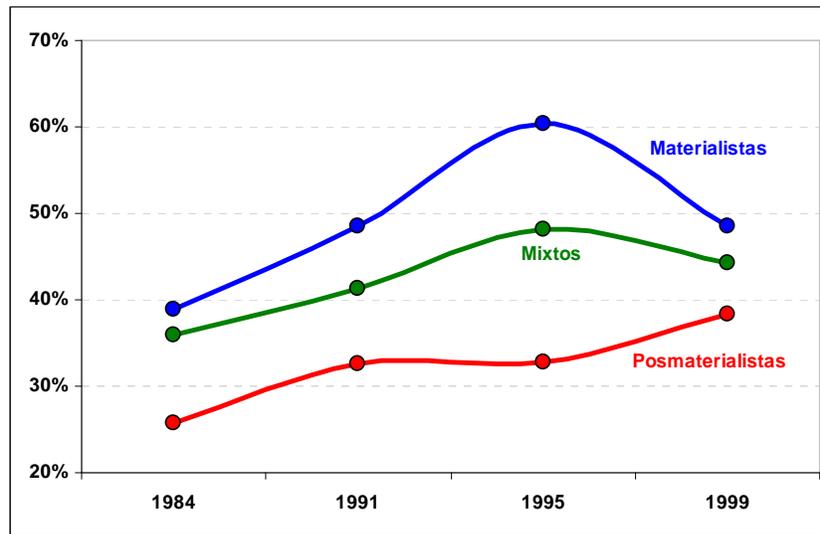
Las actitudes hacia las personas con antecedentes penales siguen una pauta distinta pero no menos sugestiva (Figura 5). Los puntos a subrayar aquí son: a) la discriminación aumenta en las tres categorías de la dimensión posmaterialista/materialista; b) existen claras diferencias de tolerancia entre las tres categorías, de acuerdo con las predicciones de la teoría; c) pero el incremento de la intolerancia entre los posmaterialistas (48% entre puntas) es mucho mayor que el registrado entre los materialistas (25%) y los mixtos (23%). En 1984, no quería gente con antecedentes penales como vecinos el 39% de los materialistas y el 26% de los posmaterialistas; en 1999, las cifras eran 49% y 38% respectivamente.

**Figura 4 – Argentina: no querría Personas con SIDA “como vecinos”**  
En % de la población



Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de la Encuesta Mundial de Valores.

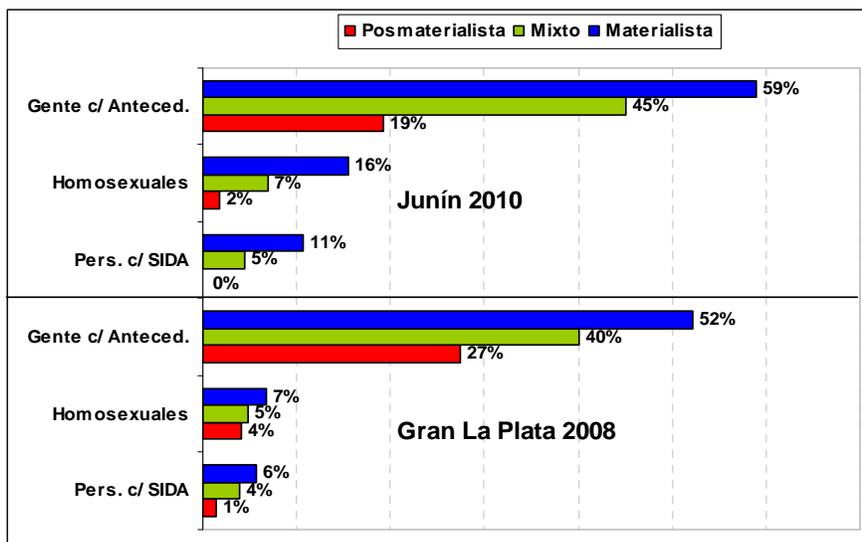
**Figura 5 – Argentina: no querría Personas con Antecedentes Penales “como vecinos”**  
En % de la población



Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de la Encuesta Mundial de Valores.

En nuestros estudios por encuesta realizados en Junín y el Gran La Plata, encontramos pautas similares a las observadas en el orden nacional en cuanto a las diferencias de tolerancia entre posmaterialistas, materialistas y mixtos (Figura 6). En el Gran La Plata, estas diferencias son muy pequeñas –aunque no desaparecen– para los homosexuales y las personas con SIDA. En ambas comunidades, sin embargo, los posmaterialistas discriminan mucho menos que los materialistas a la gente con antecedentes penales.

**Figura 6 – Junín 2010 y Gran La Plata 2008 – No querría “como vecinos”**  
En % de la población



Fuente: Proyectos de Investigación PID-P001 - Universidad Nacional de La Plata y P-0415 - Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

## **El trabajo de la democracia**

La dimensión posmaterialista/materialista refleja en el plano de la cultura el impacto del desarrollo económico. Y éste constituye, sin dudas, un factor de enorme peso a la hora de analizar la emergencia, estabilidad, profundidad y efectividad de la democracia.

En su balance histórico de las democracias en América Latina, Rouquié (2011) ha destacado el modo como nuestras “repúblicas no tocquevillianas” –en las que nunca ha imperado la “igualdad de condiciones” que caracterizaba, según De Tocqueville, a la sociedad democrática– han exhibido siempre la tensión entre su larga tradición en los principios de la libertad y el pluralismo –no fueron otros los proclamados para legitimar los movimientos de independencia– y sus estructuras sociales “no igualitarias y jerárquicas, eminentemente desfavorables a la práctica democrática” (p. 346). Si la democracia avanza hoy en la región –agrega Rouquié–, es “porque las sociedades se transforman”. Están más urbanizadas y secularizadas, las divisiones de clase son menos marcadas, la exclusión retrocede, la educación y la información se expanden (Ibíd.). Pero la modernización, aunque sea probablemente la fuerza más importante, no lo explica todo. La tradición cultural pesa. A pesar de las turbulencias que distinguen los dos siglos de existencia de nuestros países, “el fuego de la democracia nunca se apagó”. La democracia, además, “es una construcción cultural compleja, azarosa, que avanza por ensayo y error” (p. 345).

Nuestro análisis de la evolución de la tolerancia en Argentina, aunque enfocado sólo en algunos indicadores, demuestra que ese trabajo de construcción cultural de la democracia tiene efectos tangibles. Arroja también indicios de sus fallas. Es evidente que el proceso de deliberación colectiva sobre la inseguridad nunca funcionó en forma adecuada. La información ha sido poco transparente; el debate, confuso, y las políticas públicas han sufrido todo tipo de vaivenes. El temor –producto tanto del aumento real de la inseguridad, como de la confusión del público– y el discurso de la “mano dura” que predominó durante largos periodos, han tendido naturalmente a alimentar las actitudes de intolerancia.

A la inversa, el tema del SIDA ha sido, en general, objeto de políticas coherentes, de campañas informativas y de un debate público razonable. Se trata de un asunto en el que los prejuicios basados en la falta de información pueden ser modificados por una apropiada deliberación colectiva.

El tratamiento de la cuestión de la homosexualidad, aunque haya generado no pocas controversias, tendió paulatinamente, en el ámbito público y de los medios, a combatir las actitudes discriminatorias. Las organizaciones y grupos defensores de los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB) desarrollaron una agenda apoyada en la legislación transnacional y en los antecedentes del propio país en materia de derechos humanos, igual que en una estrategia de acción judicial y legislativa que probó su efectividad. El respaldo del partido de gobierno a las aspiraciones de los grupos LGTB cerró el círculo para que la Argentina se convirtiera en el décimo país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo (Corrales y Pecheny, 2010). Si bien la sociedad argentina –como señalan estos

mismos autores— se halla más secularizada que las de EE. UU., México o Brasil, es probable que la experiencia y el aprendizaje político de nuestro país en torno a la cuestión de los derechos humanos hayan creado condiciones favorables para avanzar en esa dirección.

La reducida lista de países que han aprobado hasta hoy el matrimonio igualitario sugiere una interpretación en línea con los argumentos precedentes. Holanda, Bélgica, Canadá, Suecia, Noruega e Islandia se hallan entre las naciones más avanzadas del mundo en materia de desarrollo económico y humano. Excepto en el caso particular de Islandia, están asimismo entre las sociedades en las que los valores posmaterialistas se encuentran más difundidos. En los restantes países —España, Portugal, Argentina y Sudáfrica— predominan en mayor medida los valores materialistas. Pero los tres primeros pasaron por la experiencia de largas y cruentas dictaduras, y el cuarto, por un régimen de *apartheid* que también violó los derechos humanos más elementales. El aprendizaje político parece capaz, en ciertas circunstancias, de convertirse en una fuerza transformadora de la cultura política de los pueblos.

## Notas

(1) Ver, por ejemplo, *The Guardian*: “Full-face veils outlawed as France spells out controversial niqab ban”, 3 March, 2011. CNN.com: “French senate approves burqa ban”, September 14, 2010. “El País: “Cómo legisla Europa sobre el velo”, 20 de abril de 2010.

(2) Para una exposición general de estas teorías, ver Jorge, 2010, especialmente el Capítulo 2.

(3) A la confianza y la tolerancia, Putnam agrega el compromiso cívico, la igualdad política, la solidaridad y las asociaciones civiles (1993, pp. 86-91). Otros autores de la teoría del capital social mencionan además el respeto por la ley y las normas cívicas. Algunos teóricos de la democracia consideran que los elementos culturales fundamentales son el apoyo incondicional al sistema —es decir, su legitimidad— y la confianza en las instituciones.

(4) Los proyectos son el PID-P001 “Comunicación y Cultura Política en la Región del Gran La Plata” (Universidad Nacional de La Plata, 2006-2008) y el P-0415 “La Cultura Política en el Noroeste Bonaerense” (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 2008-2011).

## Bibliografía

ALMOND, Gabriel, and Sidney Verba: *The Civic Culture. Political attitudes and democracy in five nations*, Princeton University Press, Princeton, 1963. .

CAVAROZZI, Marcelo: *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983.

CORRALES, Javier, and Pecheny, Mario: “Six Reasons Why Argentina Legalized Gay Marriage First”, *Americas Quarterly*, July 30, 2010, <http://www.americasquarterly.org>

DE MONTMOLLIN, Germaine: “El cambio de actitud”, en Moscovici, Serge (comp.), *Psicología Social I*, Paidós, Barcelona, 1985, pp. 117-173.

DIAMOND, Larry: “Three paradoxes of Democracy”, in Diamond, Larry, and Plattner, Marc F. (eds.): *Democracy. A Reader*, The John Hopkins University Press, Baltimore, 2009, pp. 73-85.

DIAMOND, Larry: “Political Culture and Democratic Consolidation”, Working Paper 1998/118, Instituto Juan March, Madrid, junio de 1998.

HEIFETZ, Ronald A.: *Liderazgo sin respuestas fáciles. Propuestas para un nuevo diálogo social en tiempos difíciles*, Paidós, Barcelona, 1997.

INGLEHART, Ronald: "How Solid Is Mass Support for Democracy: And How Can We Measure It?", *Political Science and Politics*, Vol. 36, Nº 1, 2003, pp. 51-57.

INGLEHART, Ronald: *Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in Forty-Three Societies*. Princeton University Press, Princeton, 1997.

INGLEHART, Ronald: *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, Princeton University Press, Princeton, 1990.

INGLEHART, Ronald, and Welzel, Christian: "Development and Democracy: What We Know about Modernization Today", *Foreign Affairs*, March/April 2009, pp. 33-41.

INGLEHART, Ronald, and Welzel, Christian: *Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence*, Cambridge University Press, 2005.

JORGE, José Eduardo: *Cultura Política y Democracia en Argentina*, Edulp, La Plata, 2010.

KROSNICK, Jon A., and Alwin, Diane F.: "Aging and Susceptibility to Attitude Change", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 57, Nº 3, 1989, pp. 416-425.

O'DONNELL, Guillermo, y Schmitter, Philippe C.: *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas* (Volumen 4), Paidós, Buenos Aires, 1991 (Original: 1986).

PAGE, Benjamin I. and Shapiro, Robert Y.: *The Rational Public. Fifty Years of Trends in American's Policy Preferences*, The University of Chicago Press, Chicago, 1992

PERLOFF, Richard: "Psychological Dynamics of Political Advertising Effects", *Political Communication and Persuasion* 8 (4), 1991, pp. 213-219.

PEW RESEARCH CENTER: "Pew Global Attitudes Project: Widespread Support for Banning Full Islamic Veil in Western Europe", July 8, 2010, <http://pewresearch.org>

PORTANTIERO, Juan Carlos: "Condiciones para un nuevo pacto institucional en la Argentina", en Oszlak, Oscar y otros: *Proceso. Crisis y transición democrática*, Vol. 2, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984, pp. 133-144.

PUTNAM, Robert D. "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture", *Scandinavian Political Studies*, Vol. 30, Nº 2, 2007, pp. 137-174.

PUTNAM, Robert D.: *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Princeton, 1993.

ROUQUIÉ, Alain: *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*, FCE, Buenos Aires, 2011.

SCHMITTER, Philippe C., and Karl, Terry L.: "What Democracy Is... and Is Not", *Journal of Democracy*, Summer 1991, pp. 67-73.

TORCAL LORIENTE, Mariano: "El origen y la evolución del apoyo a la democracia en España. La construcción del apoyo incondicional en las nuevas democracias", *Revista Española de Ciencia Política*, Nº 18, Abril 2008, pp. 29-65.

TOURAINÉ, Alain: *¿Qué es la democracia?*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998.

USLANER, Eric: "Trust, Diversity, and Segregation", *Social Science Research Network*,  
December 15, 2009, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1523721](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1523721)